

Tradición poco asimilada

El ocaso del parlamentarismo en Venezuela

Rafael G. Curvelo E.*



Luis Parra.

EFE

En el mundo occidental, luego de la época de la Ilustración y con el advenimiento de la Independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa, se desarrolló la denominada "democracia liberal", implantándose como un mecanismo de contrapeso de los poderes dentro del Estado. Ya no era un solo hombre quien ostentaba el poder, sino que comenzó a existir un control representado por la voluntad ciudadana

En Venezuela el parlamentarismo se remonta a 1811, cuando el 2 de marzo se instaló en Caracas el primer Congreso de nuestra historia y el más antiguo de Latinoamérica. Aunque también podemos mencionar como una génesis del parlamento venezolano al cabildo, ese espacio donde los ciudadanos más notables y de alto estatus tomaban las decisiones sobre un determinado poblado.

Se pudiera hacer un análisis más profundo sobre los antecedentes históricos del parlamento venezolano, pero desviaríamos la atención del tema donde nos interesa centrarnos. Sin embargo, daremos un pequeño repaso sobre el ejercicio legislativo que nos ha traído a estos tiempos tan complejos, donde el hiper-presidencialismo copa el ejercicio del poder en el Estado.

Históricamente nuestra tradición parlamentaria ha sido muy débil, dejando el mayor peso del poder en manos de quien ejerza la presidencia. Cuando nuestros congresos han intentado realizar algún control sobre el Poder Ejecutivo

suelen terminar defenestrados por el jefe de Estado, que a la vez ejerce el gobierno, dando los síntomas comunes a la tentativa autocrática. En este particular podemos mencionar el caso del *Asalto al Congreso* de 1848, perpetrado por José Tadeo Monagas donde murieron tres diputados. Incluso en este capítulo de nuestra historia se da la famosa frase atribuida a Fermín Toro: “Díganle al general Monagas que mi cadáver podrán llevarse, pero que Fermín Toro no se prostituye”.

Incluso Simón Bolívar, siendo en algún momento un liberal consumado, terminó rechazando ciertas prácticas del parlamentarismo: defendía el poder central y concentrado alrededor de la presidencia, así como propuso –en no pocas ocasiones–, la figura del dictador para un mayor control y posibilidad de acción sin los filtros legislativos.

Aun cuando en Venezuela han existido varios gobiernos de corte autocrático y personalista, siempre la figura parlamentaria ha estado presente, dándole cierto *republicanismo* a quien ejercía la presidencia. Los Monagas, Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez son ejemplo de este tipo de acciones.

En 1983 Teodoro Petkoff, siendo candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, afirmaba que:

Hoy la relación entre Congreso y Ejecutivo es la misma que existió entre el Congreso de Guzmán Blanco y Guzmán Blanco, y el de Gómez con Gómez. El nuestro es un Congreso todavía fuertemente lastrado por la herencia autocrática. El Congreso nuestro es el del país de las dictaduras; del país donde tenía que haber un Congreso porque había una República, pero un Congreso que no perturba los actos del dictador, un Congreso que no puede controlar los actos del Ejecutivo, ni investigarlos; tampoco los actos de cualquier otra institución; que no legisla porque las leyes las hacían los dictadores.¹

Podemos afirmar que históricamente superamos la monarquía española, pero no hemos podido superar el personalismo y el caudillismo. Males que impiden los contrapesos en el poder y ponen de manifiesto las actitudes autocráticas de algunos presidentes, que prefieren gobernar solos antes de tener que responder por sus acciones.

En nuestro mayor momento de maduración democrática se logró un desarrollo importante del parlamentarismo. Así, la década de 1960 simbolizó la construcción de un amplio pacto político, a través de la Constitución del 61. Las dificultades de la lucha armada o algunas insurrecciones militares no impidieron que el poder civil dominara la escena para los próximos años.

Aunque la monoproducción petrolera y el excesivo gasto público, permitieron que el Poder

Ejecutivo creciera auspiciando la disminución de las capacidades legislativas, no se puede negar que en momentos álgidos el Congreso Nacional tomó decisiones importantes para garantizar la estabilidad de la nación. La destitución de Carlos Andrés Pérez de la presidencia de la República es una muestra de ello.

SE INSTAURA LA ASAMBLEA NACIONAL

La elección de Hugo Chávez como presidente de la República auguraba una transformación nacional en muchos sentidos. La convocatoria a un proceso constituyente para la redacción de un nuevo texto constitucional, asentaba nuevamente el debate sobre la visión del Estado. En esta ocasión la discusión no fue tan abierta y profunda como ocurrió en 1961.

Una de las novedades que se establecía en la nueva Carta Magna es la implementación de un órgano legislativo unicameral, rompiendo el esquema bicameral que se había desarrollado en Venezuela a lo largo de su historia republicana. Esta situación también ponía de manifiesto un problema: la representación proporcional de curules dentro de la nueva Asamblea Nacional colocaba el peso de las decisiones en los estados con mayor población del país.

Por su parte, la bicameralidad garantiza un equilibrio de representación entre las regiones, ya que, aunque la cámara baja es electa por representación proporcional de los estados, la cámara alta mantiene la misma representación sin mayores modificaciones. Esto busca garantizar que las decisiones no se reduzcan a pocos estados y que los de menor población tengan la misma oportunidad de debatir y decidir por medio de sus representantes.

Con la aprobación de la nueva Constitución –vía referéndum– en 1999, se da inicio a una nueva etapa de parlamentarismo en Venezuela. La Carta Magna atribuye en el Capítulo I del Título V, el ejercicio legislativo a la Asamblea Nacional, nombre que es visto con recelo dado su parecido con el espacio *deliberativo* que se usa en Cuba. Siendo unicameral el Parlamento, contraviene el principio federal y descentralizado como establece Allan Brewer-Carías, participe de la redacción del texto constitucional.²

Durante los dos primeros periodos, la Asamblea Nacional funcionó bajo el sistema de elección mixta: se elegía una lista de diputados regionales y en simultáneo se votaba por diputados nominales, garantizando la representación proporcional de los partidos menos votados en los circuitos electorales. Esto garantizaba un equilibrio de aproximadamente 55 % de diputados electos nominalmente, contra un 45 % de ellos electos por la lista.

En el 2010, el Consejo Nacional Electoral (CNE) modifica el sistema de elección de diputados, al



CNN ESPAÑOL

cambiar los circuitos nominales y reducir drásticamente la cantidad de legisladores electos por la lista. Se da una proporción 75-25, dejando entrever que el gobierno evitaba perder la mayoría parlamentaria, aun cuando a nivel de votos no ganara el proceso, justo como ocurrió ese año.

Para las elecciones parlamentarias de 2015, el chavismo sufrió una dura derrota. Además que sumado al sistema leonino de circuitos y lista de los diputados, la oposición logró la mayoría absoluta en el Poder Legislativo. Desde este momento comenzará el mayor calvario para la Asamblea Nacional y la autonomía de los poderes públicos.

DESTROZAR LA ASAMBLEA NACIONAL

Pese a que en anteriores oportunidades el Gobierno trató de tomar atajos, impidiendo que se tomaran las decisiones trascendentales, a través de los diferentes poderes, siempre guardaron las formas y buscaban el aval parlamentario, así no tuvieran la mayoría establecida en los reglamentos, ocurriendo en no pocas veces la designación de los integrantes del Poder Ciudadano, Electoral y Judicial, con mayoría simple. De la misma forma se eligieron personas con vínculos directos al partido oficial.

En diciembre de 2015 la Asamblea Nacional, presidida por Diosdado Cabello, designa de forma exprés a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin la mayoría calificada requerida e incumpliendo los lapsos establecidos en la legislación. Esta acción buscaba evitar que con la instalación de la nueva legislatura de mayoría opositora, se designaran jueces que no fueran afectos a la *revolución*.

La instalación del renovado Parlamento, supuso una nueva etapa en la historia reciente del país. Se consideraba como el inicio del fin para

el chavismo-madurismo, así como la preparación a lo que vendría en los siguientes procesos electorales: regionales, municipales y presidenciales.

Desde el sector oficial se buscó la manera de evitar un mayor control de la Asamblea Nacional, siendo su primera acción la anulación, vía judicial, de la elección de los diputados del estado Amazonas, lo que dejaba a la oposición sin la mayoría calificada. Dicha sentencia de la Sala Electoral del TSJ se emitió el 30 de diciembre de 2015, seis días antes de la instalación del nuevo periodo parlamentario.

La reacción de los diputados opositores, al instalarse en el Parlamento, fue la de incorporar los representantes de Amazonas, lo que originó que desde el TSJ se declarara la figura del “desacato” de la Asamblea Nacional. Esto ha llevado a una pugna entre los poderes dominados por el chavismo, contra el único poder que ha mantenido su autonomía.

A pesar de la sentencia antes mencionada, en fecha 11 de enero de 2016, la Sala Electoral del TSJ ratifica el contenido de la misma y declara —como se ha dicho— el desacato, ante lo cual el propio Parlamento desincorporó a los diputados de Amazonas el 13 de enero, pero como recoge la ONG Acceso a la Justicia³, esto no contribuyó a pacificar la situación generada desde el sector oficial. Podemos mencionar en este punto que, aunque Nicolás Maduro presentó la memoria y cuenta de ese año ante la Asamblea Nacional, nunca hubo una disposición a buscar una convivencia política entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En medio del desacato impuesto —vía judicial— a la Asamblea y que el TSJ estaba dando directrices legislativas, para 2017 Maduro convoca un proceso Constituyente, sin pasar por el requerido referéndum para su aprobación. Importante



destacar que la elección para los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se da sin la participación de la oposición y con denuncias de graves irregularidades. Su posterior instalación dejó ver que no buscaba reformar la Constitución, pero sí sustituir el trabajo legislativo que debería desarrollar el Parlamento.

Durante este periodo legislativo, se ha dado la rotación de la directiva de la Asamblea Nacional, sin mayores contratiempos. La última, encabezada por Juan Guaidó, llevó a que este se *autojuramentara* como presidente encargado de Venezuela el pasado 23 de enero de 2019, al desconocer la elección presidencial que reeligió a Maduro como presidente; este evento ha sido reconocido por casi sesenta países, lo que lleva a escalar más el conflicto político.

AÑO 2020: DIFICULTADES Y RETOS

Estamos entrando al último año de la legislatura, el próximo debería instalarse con una nueva Asamblea Nacional. Una disyuntiva donde los propios diputados, en conjunto con el resto de la oposición, deben definir qué hacer.

La rebelión de un grupo de diputados en contra de Guaidó, acusados estos de estar metidos en actos de corrupción, llevó a la elección de forma irregular de una directiva paralela dentro del Parlamento. Dicha acción tiene el respaldo de la bancada gubernamental, así como el reconocimiento de Nicolás Maduro. Se trata pues de la directiva encabezada por el diputado Luis Parra.

Mientras la oposición se fractura, el Gobierno y sus aliados se fortalecen. Juan Guaidó tiene que buscar una estrategia que reunifique a los adversarios de Nicolás Maduro, entendiendo que estos son más diversos ahora que en 2015: la

oposición ahora tiene personajes tan dispares como María Corina Machado y Juan Barreto.

Se tiene que buscar un mecanismo que evite la *autodestrucción* del Parlamento. De no lograr una reinstitucionalización, se impondrá por la vía de los hechos la ANC con una política de aniquilación hacia el contrario sin mayor resistencia.

La designación de un CNE que goce de la confianza ciudadana, debe darse desde la Asamblea Nacional y con la aquiescencia del sector oficial. De darse dicha designación vía judicial, *pondría más agua al molino* de la abstención, lo que perjudica la institucionalidad del país.

Los mecanismos de diálogo que se han desarrollado entre Gobierno y oposición deben ser ampliados, y buscar abordar los puntos comunes que contribuyan a aliviar la crisis nacional. Por su parte, el Gobierno es el que tiene que dar mayores muestras de apertura y ceder ante las demandas ciudadanas que se dan día a día.

Hoy el liderazgo político, de ambos bandos, tiene sobre sus hombros la responsabilidad de definir el rumbo que quieren para Venezuela: si el de la concordia o la confrontación.

*Político y analista. Miembro del Consejo de Redacción SIC.

NOTAS:

- 1 HERNÁNDEZ, R. (1983): *Teodoro Petkoff: viaje al fondo de sí mismo*. Caracas, Venezuela: Editorial Fuentes.
- 2 BREWER-CARÍAS, A. (2008): *La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Caracas, Venezuela: Editorial Jurídica Venezolana.
- 3 Acceso a la Justicia: El observatorio venezolano de la justicia (2016). Caracas, Venezuela. *Desacato de la Asamblea Nacional por la incorporación de los diputados del estado Amazonas*. Disponible en: <https://www.accesoalajusticia.org/desacato-de-la-an-por-la-incorporacion-de-los-diputados-por-el-estado-amazonas-suspendidos/>